

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Auto interlocutorio No. _____

Santiago de Cali, veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós (2022).

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

ACCIÓN:	Ejecutivo
REFERENCIA:	76001-23-33-000-2018-01142-00.
DEMANDANTE:	José Jesús Cifuentes Gutiérrez y otros. consultingrisk@cr-abogados.com ;
DEMANDADO:	Nación – Fiscalía General de la Nación. jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
TEMA:	Medida cautelar / Embargo de productos bancarios
DECISIÓN:	Decreta medida cautelar

I. MOTIVO DEL PRONUNCIAMIENTO

Decidir sobre la solicitud de medida cautelar de embargo y retención de dineros impetrada por el apoderado de la parte ejecutante.

II. CONSIDERACIONES

A través de memorial presentado por el apoderado de la parte ejecutante, se solicita como medida cautelar, el embargo y retención de los dineros contenidos en las cuentas de ahorro, corrientes, CDT, encargos fiduciarios, y/o sus rendimientos, cuentas en participación, títulos valores, derechos fiduciarios y/o sus rendimientos, fondos de inversión colectiva, patrimonios autónomos y/ o sus rendimientos que posea la entidad ejecutada Nación - Fiscalía General de la Nación, en el Banco GRANBANCO, Banco Bantismo, BCSC Banco Colmena, Banco Caja Social, Citibank, Banco DAVIVIENDA, Banco de Bogotá; BANCOLOMBIA, Banco de Crédito, Banco de Occidente, Banco BBVA, Banco Popular, Banco Santander, Banco GNB Sudameris, Banco AV Villas, Banco COOMEVA, Banco Agrario y Banco Superior.

El artículo 599 del Código General del Proceso, en lo que refiere a medidas cautelares en procesos ejecutivos, consagra que:

“Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.

(...).

El juez, al decretar los embargo y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario, el valor de los bienes no podrá exceder el doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas (...).”



Siendo que el título ejecutivo objeto de recaudo contiene una obligación clara expresa y actualmente exigible en favor de los ejecutantes, tal como se analizó en el auto interlocutorio con el que se decidió librar mandamiento ejecutivo de pago, es viable decretar la medida cautelar de embargo y retención de los dineros que la entidad ejecutada tenga en los productos bancarios relacionados en el escrito de medidas cautelares.

De otra parte, es menester aclarar que, por regla general, los recursos del Presupuesto General de la Nación (artículo 48 de la Constitución Política), los destinados al Sistema de Seguridad Social Integral (artículo 134 de la Ley 100 de 1993) y los asignados para el pago de sentencias y conciliaciones (parágrafo 2 Art. 195 Ley 1437 de 2011), entre otros, son inembargables.

No obstante, la Corte Constitucional ha trazado una línea jurisprudencial sobre ese principio de inembargabilidad y sus excepciones.

En efecto, en la sentencia C-543 de 2013 reiteró dichas reglas de excepción en los siguientes términos, las cuales tienen como propósito el de armonizar la regla general de inembargabilidad con otros principios, valores y derechos constitucionales tales como la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo¹:

“Sin embargo, contempló excepciones a la regla general para armonizar el principio de inembargabilidad de recursos públicos con otros principios, valores y derechos constitucionales, entre los que se encuentran, la dignidad humana, la vigencia de un orden justo y el derecho al trabajo. Éstas son:

(i) Satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas².

(ii) Pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos³.

(iii) Títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible.⁴

(iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico)⁵.

¹ C-543 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

² C-546 de 1992

³ En la sentencia C-354 de 1997 (Antonio Barrera Carbonell), se expuso que, aunque el principio general de inembargabilidad que consagraba la norma acusada resultaba ajustada a la Constitución. Preciso que tratándose de los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos.

⁴ La sentencia C-103 de 1994 (Jorge Arango Mejía), se estableció una segunda excepción a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, así: para hacer efectiva una obligación que conste en un acto administrativo que preste mérito ejecutivo, esto es, que sea expresa, clara y exigible, procederá la ejecución después de los diez y ocho (18) meses.

⁵ C-793 de 2002. M.P. Jaime Córdoba Triviño



Esta posición ha sido reiterada por la Corporación, sin que haya declarado la inexecutable de las normas referentes a la inembargabilidad de bienes y recursos públicos⁶, como lo pretende el actor.”

Si bien la Corte Constitucional en la mencionada sentencia se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo frente a la demanda presentada por un ciudadano contra el parágrafo 2 del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 70 (parcial) de la Ley 1530 de 2012, y los numerales 1, 4, y el parágrafo del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, por ineptitud de la misma; también lo es que la alta Corporación, en sus argumentos, enfatiza que en todos estos eventos son aplicables las excepciones al principio de inembargabilidad fijadas por ella en sus pronunciamientos abstractos de constitucionalidad. Veamos:

“(…) el demandante se encontraba obligado a explicar, bajo la óptica de la interpretación del principio de inembargabilidad, porqué en estos eventos no son aplicables las excepciones al mismo cuando se encuentran cobijados por los pronunciamientos abstractos de constitucionalidad sobre la materia y que deben guiar la interpretación de los operadores jurídicos al resolver los casos concretos en relación con este principio.

(…)

(…) el demandante no explica por qué a pesar de que esta Corporación ha desarrollado una línea jurisprudencial reiterada sobre el principio de inembargabilidad y la necesidad de armonizar este principio con los derechos, principios y valores constitucionales a través de las excepciones al mismo, con el fin, precisamente, de garantizar la efectividad de los derechos de los acreedores de la Nación y de las entidades públicas, sigue considerando que existe un nivel de desprotección para el pago de estas obligaciones.

(…)

(…) puede observarse que las excepciones consagradas al principio de inembargabilidad de los recursos y bienes públicos frente al pago de sentencias condenatorias y conciliaciones siempre ha operado una vez ha transcurrido un determinado plazo para hacer exigibles estas obligaciones, luego de su ejecutoria, ante la administración, esto es, no ha operado como una medida cautelar previa a la presentación de la demanda contra la Nación o las entidades estatales, circunstancia que tampoco evidencia el demandante para explicar por qué este evento es diferente y no le son aplicables las subreglas fijadas por la Corte en este respecto”.

Con relación a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 594 del Código General del Proceso, en la misma sentencia C543 de 2013, la Corte aclaró:

“(…) Al contrario, en esta norma se consagra expresamente la posibilidad de aplicar las excepciones al principio general de inembargabilidad de recursos públicos, sólo que ante la ausencia de fundamento legal, la entidad receptora de la medida entenderá que se revoca la misma si la autoridad que la decreta no explica el sustento del embargo sobre recursos inembargables. Pero si insiste, decretará el embargo y, si bien, procede el congelamiento de recursos, éstos son depositados en una cuenta especial con el reconocimiento de los respectivos intereses, y serán puestos a disposición del Juzgado una vez cobre ejecutoria la sentencia o si la providencia que pone fin al proceso así lo ordena”. (Subrayas originales del texto).

⁶ La línea jurisprudencial que desarrolla lo atinente al principio de inembargabilidad de los bienes y recursos públicos como sus excepciones está compuesta, principalmente, por las siguientes sentencias: C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C-402 de 1997, T-531 de 1999, C-427 de 2002, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566, C-871 y C-1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008 y C-539 de 2010.



Por manera que, las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos públicos, que por vía jurisprudencial ha establecido la Corte Constitucional, están vigentes y, por lo tanto, son oponibles a las prohibiciones consagradas en el parágrafo 2º del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 y en los artículos 70 de la Ley 1530 de 2012 y 594 de la Ley 1564 de 2012 (CGP).

Por consiguiente, en tratándose de los tres eventos que constituyen la excepción en comento, el operador judicial podrá, según el caso, decretar el embargo y congelación de los: **i)** recursos de libre destinación, **ii)** recursos destinados al pago de condenas judiciales o conciliaciones, o **iii)** recursos destinados al sistema de seguridad social en pensiones⁷.

Teniendo en cuenta que en el presente asunto convergen dos de las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos públicos previstas jurisprudencialmente por la Corte Constitucional, por cuanto se pretende la satisfacción de una obligación contenida en unas providencias judiciales, se decretará el embargo y retención de los dineros que la Nación – Fiscalía General de la Nación tenga como titular en los productos bancarios y entidades financieras antes relacionadas, dejando claro que aún si estas cuentas poseen el carácter de inembargables deberá procederse con la medida solo si hacen parte de: **i)** recursos de libre destinación, o **ii)** recursos destinados al pago de condenas judiciales o conciliaciones.

De conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo 594 del Código General del Proceso, los dineros embargados en las circunstancias antes descritas, deberán ser congelados en una cuenta especial que devengue intereses en las mismas condiciones de la cuenta o producto de la cual se produce el débito. Estas sumas retenidas serán puestas a disposición de este Despacho, una vez cobre ejecutoria la sentencia o la providencia que ponga fin a este proceso, aspecto que será informado por este Despacho en su debido momento.

En caso de que los dineros depositados no tengan el carácter de inembargables, se dará aplicación al procedimiento consagrado en el numeral 10 del artículo 593 ibídem, esto es, que los establecimientos bancarios deberán constituir certificado de depósito y ponerlo a disposición de este Despacho dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del oficio correspondiente.

IV DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Despacho del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE:

⁷ Este último, solo si se trata de obligaciones pensionales.



PRIMERO. DECRETAR el embargo y congelamiento de los dineros que posea la Nación – Fiscalía General de la Nación, **COMO TITULAR**, en las cuentas de ahorro, corrientes, CDT, encargos fiduciarios, y/o sus rendimientos, cuentas en participación, títulos valores, derechos fiduciarios y/o sus rendimientos, fondos de inversión colectiva, patrimonios autónomos y/ o sus rendimientos del Banco GRANBANCO, Banco Bantismo, BCSC Banco Colmena, Banco Caja Social, Citibank, Banco DAVIVIENDA, Banco de Bogotá; BANCOLOMBIA, Banco de Crédito, Banco de Occidente, Banco BBVA, Banco Popular, Banco Santander, Banco GNB Sudameris, Banco AV Villas, Banco COOMEVA, Banco Agrario y Banco Superior.

SEGUNDO. Con fundamento en las excepciones de inembargabilidad de los recursos públicos señaladas por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 2013, entre otras, el embargo sólo podrá recaer sobre las cuentas indicadas en el numeral precedente si los recursos allí depositados son: **i) de libre destinación** o **ii) están destinados al pago de condenas judiciales o conciliaciones**, sin importar su condición de inembargables.

TERCERO. Para la efectividad del ordinal anterior, **OFICIAR** a los gerentes de las entidades bancarias respectivas para que, de conformidad con lo señalado en el párrafo del artículo 594 del CGP, los dineros embargados se congelen en una cuenta especial que devengue intereses en iguales condiciones que la cuenta o producto del cual se produce el débito. Las sumas retenidas serán puestas a disposición de este despacho una vez cobre ejecutoria la sentencia o providencia que ponga fin a este proceso, aspecto que será informado por este despacho en su debido momento.

CUARTO. En caso que los dineros depositados no tengan carácter de inembargables, los establecimientos bancarios darán aplicación al procedimiento consagrado en el numeral 10 del artículo 593 del CGP, es decir, deberán constituir certificado de depósito y ponerlo a disposición de este despacho dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del oficio correspondiente.

QUINTO. La presente medida se limita en la suma de *ciento cincuenta millones de pesos m/cte.* (\$150.000.000) en los términos del numeral 10º del artículo 593 del Código General del Proceso.

SEXTO. Se ordena a la Secretaría del Tribunal que libre los oficios respectivos, cuyo trámite estará a cargo de la parte interesada, comunicando lo del caso y con las advertencias realizadas en esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

Magistrado Ponente

(Firma electrónica SAMAI)